

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 1 .- .-

NOMENCLATURA	: 1. [40] Sentencia
JUZGADO	: 29° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-6193-2021
CARATULADO	: TORROJA/FISCO DE CHILE

Santiago, trece de Junio de dos mil veintidós

VISTOS:

Felipe Daniel González Berríos, abogado, domiciliado en Estado N° 215, oficina 806, Santiago, en representación de: i) Dina Beatriz Antonina Torroja Yáñez, pensionada, domiciliada en Juan Enrique Berstein, parcela N° 1, Paine; ii) Ana María Olivares Tapia, publicista, domiciliada en Presidente Balmaceda N° 2088, departamento 1405, Santiago; iii) Jaime Orlando Rivera Pérez, pensionado, domiciliado en calle San Jorge, casa 69, Rengo; iv) Pedro Patricio Rojas Uribe, pensionado, domiciliado en calle Obispo Javier Vásquez Valencia N° 3866, casa 18, Estación Central; v) Juan Segundo Galleguillos Rojas, pensionado, domiciliado en Las Heras N° 3594, Arica; y, vi) Victor Rubén Morales Inda, pensionado, domiciliado en calle Angol N° 2347, Arica, deduce demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por Juan Antonio Peribonio Poduje, Presidente del Consejo de Defensa del Estado, abogado, domiciliado en Agustinas N° 1225, piso 4, Santiago.

Respecto de Dina Beatriz Antonina Torroja Yáñez, relata que para la época del Golpe de Estado era estudiante de la Universidad del Norte y trabajaba como Secretaria General de la Federación de Estudiantes de esa Casa de Estudios, siendo militante de las Juventudes Comunistas, motivos por los que fue detenida el 17 de septiembre de 1973 en la Población Cabo Aroca, donde se reunía con otros estudiantes, por funcionarios del Servicio de Inteligencia Militar, quienes sin orden judicial los mantuvieron detenidos hasta el mes de julio de 1974, para después una semana con arresto domiciliario y un año con firma semanal, sin poder salir de la ciudad. Sostiene que durante la detención fue interrogada en reiteradas ocasiones, bajo amenazas en contra de su integridad física y la de su familia. También sufrió torturas físicas y psicológicas, ella y sus familiares, destacando que permaneció incomunicada durante la detención. Lo anterior le



«RIT»

Foja: 1

produjo un estado de angustia permanente, haciendo presente que hasta nuestros días se quiebra emocionalmente al recordarlo.

Señala que por los hechos relatados fue reconocida por el Estado de Chile como víctima de violaciones a los Derechos Humanos, siendo incluida en la nómina elaborada por la Comisión Nacional sobre Prisión, Política y Tortura del año 2004, con el número 24.522.

En cuanto a Ana María Olivares Tapia, señala que fue aprehendida por primera vez el día 25 de julio de 1986, cuando era estudiante universitaria del “Pedagógico” y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, en el marco de una actividad política y pacífica en contra de la dictadura, por funcionarios de Carabineros, quienes la trasladaron a la Comisaría llamada Dávila, donde la retuvieron hasta el día 8 de agosto de 1986, lugar donde fue interrogada en forma violenta, lo que le causó gran temor y estrés, sentimientos que perduran hasta hoy, causándole un grave daño moral.

Relata otro episodio, posterior al “atentado a Pinochet”, como lo designa, cuando fueron detenidos y allanados en reiteradas ocasiones, gestionando con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) su salida del país, rumbo a Argentina, para volver dos meses después a Chile, por seguridad y protección.

Señala que por estos hechos fue reconocida por el Estado de Chile como víctima de violaciones a los Derechos Humanos, siendo incluida en la nómina elaborada por la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión, Política y Tortura (Valech II), con el número 6.168.

En relación a Jaime Orlando Rivera Pérez, indica que todo comenzó el día 12 de septiembre de 1973, cuando fue detenido en su lugar de trabajo por una patrulla de Carabineros y militares, siendo detenido por motivación política. Explica que lo trasladaron a la Comisaría de Rancagua, donde fue esposado e interrogado, golpes mediante con la culata del armamento y otros elementos, quedando esposado por días, perdiendo la noción del tiempo. El día 3 de septiembre lo sacaron del calabozo y los trasladaron al Regimiento de Rancagua, donde nuevamente fue interrogado y torturado, para luego ser trasladado el 14 de septiembre a la Cárcel de Rancagua, donde no había mucha comida, estaba todo sucio, no había abrigo ni espacio. Señala que empezaron a llevarlo a la Fiscalía Militar, donde lo interrogaban y torturaban con golpes de puño, con varillas de bronce, un mazo de goma, patadas, hasta ser dejado sin conciencia.



«RIT»

Foja: 1

Indica que entre los daños más terribles que la detención y tortura le causaron está la pérdida de su hijo a un mes de nacer, ya que su mujer estaba embarazada de ocho meses cuando lo tomaron detenido.

Señala que por los hechos relatados fue reconocida por el Estado de Chile como víctima de violaciones a los Derechos Humanos, siendo incluido en la nómina elaborada por la Comisión Nacional sobre Prisión, Política y Tortura del año 2004, con el número 20.759.

Respecto de Pedro Patricio Rojas Uribe, expone que para la época del Golpe de Estado era estudiante del Liceo Técnico y estaba en primero medio, militaba en las Juventudes Comunistas de Chile y era distribuidor de literatura de izquierda. Por esta razón fue detenido en su domicilio el día 11 de septiembre de 1979, detención que duró aproximadamente una semana, en la Comisaría de Carabineros de la José María Caro, donde sufrió apremios físicos y psicológicos. Describe que lo torturaron con gas, sin agua ni alimento, le aplicaron corriente, fue sometido a un simulacro de fusilamiento y víctima de amenazas. Finalmente, la Corte de San Miguel lo dejó en libertad por falta de méritos, gracias a un recurso de amparo gestionado por su familia y la Vicaría la Solidaridad.

Agrega que nuevamente fue detenido en el mes de abril de 1989, y que lo dejaron en libertad el día siguiente.

Cuenta que hasta la actualidad se encuentra con tratamiento psicológico por causa de la afectación emocional que le generó las torturas.

Señala que por estos hechos fue reconocido por el Estado de Chile como víctima de violaciones a los Derechos Humanos, siendo incluido en la nómina elaborada por la Comisión Nacional sobre Prisión, Política y Tortura del año 2004, con el número 21.422.

En cuanto a Juan Segundo Galleguillos Rojas, señala que era Presidente del Sindicato Industrial Trabajadores de Mellafe y Salas Ltda, industrias electrónicas de Arica, siendo detenido en su lugar de trabajo el día 12 de septiembre de 1973, hasta el día siguiente. Lo detuvieron junto a otros trabajadores, con golpes y culatazos, los mantuvieron con posiciones forzadas todo el día y en la noche los metieron amontonados a calabozos, según describe.

Agrega que lo detuvieron nuevamente el 4 de diciembre de 1973, en la misma empresa, hasta el 9 de diciembre de ese año, acusado de poner una bomba en el sistema eléctrico de la empresa, oportunidad en que lo encerraron en un calabozo y lo torturaron con electricidad y golpes.

Indica que lo detuvieron por tercera vez, también en la empresa, siendo sometido a un proceso militar, en el que fue condenado a cumplir una pena de



«RIT»

Foja: 1

presidio hasta el 10 de octubre de 1974, y cuando salió en libertad lo hicieron cumplir una relegación a Ovalle de cuatro años, hasta el 10 de octubre de 1978.

Explica que su familia no soportó esta dinámica, perdió a su esposa e hijos, así como muchas prestaciones de su trabajo. Le dejaron de pagar el sueldo, por tener antecedentes penales, y lo echaron sin razones. Indica que los antecedentes penales lo perjudican hasta el día de hoy, ya que no ha podido encontrar un trabajo digno, todo lo que le ha provocado un gran daño moral, destacando que no ha logrado rehacer su familia, a pesar de haber recibido tratamiento psicológico.

Señala que por los hechos narrados fue reconocido por el Estado de Chile como víctima de violaciones a los Derechos Humanos, siendo incluido en la nómina elaborada por la Comisión Nacional sobre Prisión, Política y Tortura del año 2004, con el número 9.393.

En cuanto a Víctor Rubén Morales Inda, sostiene que durante la dictadura era militante comunista, Presidente Provincial de los Obreros de Vialidad y Delegado ante la Corporación Unitaria de Trabajadores, siendo detenido el 13 septiembre de 1973 en su lugar de trabajo, en la ciudad de Iquique, permaneciendo privado de libertad hasta el 30 septiembre de 1973. Primero en la Comisaría de Iquique, donde lo torturaron con golpes de culatazos de metralletas, sin alimentación y en lugares insalubres, lo que le provocó mucha angustia y ataques de nervios.

Cuando lo trasladaron al campamento de Pisagua, fue torturado físicamente con aplicación de electricidad, y psicológicamente con amenazas hacia su familia. Cuenta que una vez liberado, tuvo que recibir apoyo de organizaciones de Derechos Humanos para poder seguir viviendo, porque salió de ese lugar destrozado, no era capaz de hacer una vida normal, daño que permanece hasta hoy. Indica que ha tenido que buscar ayuda para poder trabajar los sentimientos negativos que le genera recordar la prisión y la tortura, sigue trabajando en esto y siente que es algo con lo que debe aprender a vivir, pero que no se pasa, es un daño permanente.

Señala que por los hechos relatados fue reconocido por el Estado de Chile como víctima de violaciones a los Derechos Humanos, siendo incluido en la nómina elaborada por la Comisión Nacional sobre Prisión, Política y Tortura del año 2004, con el número 15.720.

Aseveran que los autores de estos hechos eran agentes del Estado, que formaban parte del Ejército y Carabineros de Chile, por lo que tenían la calidad de funcionarios públicos. En virtud de esta condición es que cabría responsabilidad civil al Estado de Chile.



«RIT»

Foja: 1

Plantea que existe responsabilidad extracontractual, que tiene su origen en un hecho ilícito, a raíz del cual se ha causado daño, existiendo una relación de causalidad entre la acción del funcionario público y el daño producido. Pone de relieve que la acción civil tiene su origen en un delito de lesa humanidad, que tiene un carácter humanitario.

Arguye que la Ley de Bases Generales de la Administración señala que el Estado será responsable por los daños que causaren los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que las hubiere ocasionado.

Enfatiza que los hechos descritos configuran graves violaciones a los Derechos Humanos, consistentes en crímenes de lesa humanidad, tortura y persecución, entre otros. En este caso, asegura se han vulnerado todos aquellos instrumentos de carácter internacional que consagran el derecho a la vida y a la integridad personal, principalmente los artículos 1, 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 1° de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, los artículos 6, 7 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todo el contenido de la Convención Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, los Principios de Núremberg, los Convenios de Ginebra de 1949, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y las normas de *ius cogens* relativas a crímenes internacionales.

Por lo anterior, esgrime que el deber de reparación debe abordarse desde una perspectiva doble, por el carácter de estos hechos ilícitos, que causan daño como crímenes de trascendencia internacional, es decir: la obligación de reparación en el derecho internacional y la responsabilidad del Estado, y la obligación de reparar en el derecho chileno.

Reflexiona sobre la responsabilidad del Estado a la luz del Derecho Internacional, concluyendo que existe la obligación de reparar de acuerdo a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile, por cuanto el derecho internacional ha establecido que un hecho ilícito internacional genera la responsabilidad del Estado y la consiguiente obligación de reparar el daño, por concurrir los siguientes requisitos: a) violación de una obligación internacional, en este caso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y, en general, todos los instrumentos de Derecho Internacional convencional, así como el Derecho Internacional imperativo,



«RIT»

Foja: 1

en lo referente a graves violaciones a los Derechos Humanos, caracterizadas como crímenes contra la humanidad; y, b) el autor o autores de la violación deben ser agentes del Estado, como en el caso de marras, en que las torturas y, en general, todos los daños, penurias y sufrimientos denunciados, fueron cometidos por agentes públicos, lo que fue tolerado por el Estado.

En cuanto a la responsabilidad del Estado y la obligación de reparar en el derecho chileno, repasa las instituciones del derecho que contienen esos estatutos. Así, hace referencia a la Constitución Política de la República y a la Ley N° 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, citando también doctrina y jurisprudencia.

Por otro lado, indica que el Estado de Chile ha reconocido su responsabilidad en estos hechos en forma expresa, a través del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, donde queda constancia de la sistematicidad de las graves violaciones a los Derechos Humanos y de la represión ejercida en habitantes de la Región de O'Higgins. Por su parte, el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura reconoce a sus representados como víctimas de la práctica institucional de la tortura, lo cual estima debe servir como demostración del reconocimiento del Estado de su responsabilidad.

Reitera que sus representados fueron víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos, en particular, crímenes de lesa humanidad de tortura, sufriendo daños gravísimos, toda vez que las violaciones masivas y sistemáticas a los Derechos Humanos ejecutadas por agentes del Estado produjeron un considerable, indeleble, profundo, extenso, grave y perdurable daño moral que ha marcado para siempre a quienes soportaron tal experiencia. Plantea que la tortura y los padecimientos físicos dejan secuelas físicas, mentales y psicosomáticas para toda la vida.

Por concepto de daño moral, para intentar compensar el sufrimiento causado por la detención, tortura física y psicológica, sufrimientos por la represión política y persecución durante la dictadura, solicita la suma de \$150.000.000 para cada uno de los demandantes, más reajustes e intereses.

Se refiere, a continuación, a la imprescriptibilidad de las acciones judiciales en casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad, por tratarse de materias que se encuentran regidas por normas de carácter público e internacional, citando al efecto normativa internacional que así lo señalaría, y pronunciamientos de la Excma. Corte Suprema y de las Cortes de Alzada.

Termina señalando que, en la especie, se darían todos los requisitos que obligan al Estado a indemnizar los perjuicios causados a sus representados, por lo



«RIT»

Foja: 1

cual, en virtud de la normativa nacional e internacional que cita, reitera la petición de que se condene expresamente al Estado de Chile a pagarles, a título de indemnización de perjuicios por el daño moral sufrido por los crímenes perpetrados en su contra, la suma de \$150.000.000 a cada uno de ellos, más reajustes e intereses desde la notificación de esta demanda y hasta el pago efectivo y total, o la suma que el Tribunal estime ajustada, con costas.

Con fecha 3 de septiembre de 2021 se notifica la demanda.

Con fecha 23 de septiembre de 2021 contesta el Fisco de Chile.

Alega la excepción de reparación integral, toda vez que la demanda sería improcedente, porque los actores ya habrían sido indemnizados. Reflexiona acerca del marco general de los resarcimientos ya otorgados y la complejidad reparatoria, señalando que los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno del entonces Presidente Patricio Aylwin, en lo que respecta a la justicia transicional, fueron los siguientes: "a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; b) la provisión de reparaciones para los afectados; y, c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse". En lo relacionado con el segundo objetivo, plantea que la Comisión Verdad y Reconciliación o "Comisión Rettig", formuló en su informe final una serie de "propuestas de reparación", entre las cuales se encontraba una "pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas" y algunas prestaciones de salud. Dice que dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que el sr. Presidente de la República envió al H. Congreso, que luego se convertiría en la Ley N° 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, "reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas". Por su parte y en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación, precisa que el ejecutivo, siguiendo el informe de la Comisión, entendió por reparación: "un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe".

Agrega que a dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena en "un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas".

Concluye que la compensación de daños morales y la mejora patrimonial son dos claros objetivos de estas normas.



«RIT»

Foja: 1

Asimismo, que una vez asumida esta idea reparatoria, la Ley N° 19.123 y otras normas jurídicas conexas han establecido diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación, que explican cómo el país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional, según asevera.

Indica que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones: i) reparaciones mediante transferencias directas de dinero; ii) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y, iii) reparaciones simbólicas.

En cuanto a la reparación mediante transferencias directas de dinero, manifiesta que diversas leyes la habrían establecido, incluyendo a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos. Destaca que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, al mes de diciembre de 2019, en concepto de: a) pensiones, la suma de \$247.751.547.837, como parte de las asignadas por la Ley N° 19.123 (Comisión Rettig); b) pensiones por \$648.871.782.936, como parte de las asignadas por la Ley N° 19.992 (Comisión Valech); c) bonos por \$41.910.643.367, asignados por la Ley N° 19.980 (Comisión Rettig) y otros \$23.388.490.737 por la referida Ley N° 19.992; d) desahucios (bono compensatorio) por la suma de \$1.464.702.888, asignados por medio de la Ley N° 19.123; y, e) bono extraordinario (Ley N° 20.874) por la suma de \$23.388.490.737. En consecuencia, al mes de diciembre de 2019 el Fisco habría desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.

Luego de referirse a las formas de reparación implementadas, sostiene en materia de identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas, que de todo lo expresado podría concluirse que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH. no solo han cumplido los estándares internacionales de justicia transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables con nuestra realidad financiera. Por tanto, considerando que la acción se basa en los mismos hechos y se pretende con ella se indemnicen los mismos daños que han inspirado el cúmulo de acciones reparatorias enunciadas, opone la excepción de pago, por haber sido indemnizadas las demandantes en conformidad a la leyes N° 19.123 y 19.980.

En subsidio, opone la excepción de prescripción extintiva, que funda, en síntesis, en que según lo que se expuso en la demanda, la detención, torturas y apremios que sufrieron los actores ocurrieron entre los años 1973 y 1986. Agrega que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura, por la imposibilidad de las víctimas o sus familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de Justicia, sino hasta la





«RIT»

Foja: 1

restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda, esto es, al 3 de septiembre de 2021, había transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el artículo 2332 del Código Civil.

Alega la excepción de prescripción de 4 años establecida en dicha norma legal y, en subsidio, la excepción de prescripción de 5 años del artículo 2515, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a la indemnización y la notificación, igualmente transcurrió con creces el plazo legal.

Sobre el particular, indica que por regla general todos los derechos y acciones son prescriptibles y que, por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, que en este caso no existe. En el mismo sentido, considera que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves y perturbadoras.

Recuerda que la prescripción es una institución universal y de orden público, manifestando que las normas del Título XLII del Libro IV del Código Civil que la consagran y, en especial, de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general, para todo el ordenamiento jurídico y no solo para el ámbito privado. Posteriormente, dice que la jurisprudencia existente en la materia, citando fallos de la Excma. Corte Suprema que a su entender tendrían aplicación para el caso, no otorgarían a la indemnización de perjuicios, cualquiera sea su origen o naturaleza, un carácter sancionatorio, de modo que jamás puede de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago, por ser su contenido netamente patrimonial. Así planteado, postula que no debe sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción.

Asegura que la imprescriptibilidad conforme al derecho internacional de los Derechos Humanos no contempla las acciones civiles derivadas de los delitos o crímenes de lesa humanidad, ni prohíbe o impide la aplicación del derecho interno.

Plantea que el monto pedido sería excesivo, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado y los montos promedios fijados por los Tribunales de Justicia, que habrían actuado con mucha prudencia. En subsidio, señala que respecto a la regulación del daño moral debe considerarse los pagos ya recibidos de parte del Estado, conforme a las leyes de reparación N° 19.123 y 19.980.

Alega la improcedencia del pago de intereses y reajustes.

Con fecha 4 de octubre de 2021 la parte demandante evacúa el trámite de réplica.



«RIT»

Foja: 1

Subraya el reconocimiento de los hechos por parte de la demandada y alega la improcedencia de la excepción de pago opuesta, ya que las normas invocadas por el Fisco solo establecen pensiones de sobrevivencia, por lo que pretender que una pensión que bordea los \$130.000 es la reparación que mandata el Derecho Internacional, carecería de cualquier asidero. A continuación, cita jurisprudencia pronunciada por nuestros tribunales y se refiere a la improcedencia de la excepción de prescripción extintiva, a la luz del derecho nacional e internacional, así como a lo establecido por nuestros tribunales.

Con fecha 13 de octubre de 2021 la demandada evacúa el trámite de dúplica, reiterando sus defensas.

Con fecha 25 de octubre de 2021 se recibe la causa a prueba.

Con fecha 8 de junio de 2022 se cita a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que del examen de los escritos de discusión, fluye que la tesis fáctica propuesta, respecto de la detención ilegal, prisión y torturas sufridas por Dina Beatriz Antonina Torroja Yáñez, Ana María Olivares Tapia, Jaime Orlando Rivera Pérez, Pedro Patricio Rojas Uribe, Juan Segundo Galleguillos Rojas y Víctor Rubén Morales Inda, producto de la acción de agentes del Estado, verificadas durante el denominado “régimen militar” o simplemente “la dictadura”, son hechos no controvertidos.

En línea con lo anterior, no se rebate que por tales motivos estas personas fueron calificadas como víctimas en el listado elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I y II , asignándoles los números 24.522, 6.168, 20.759, 21.422, 9.393 y 15.720, respectivamente.

Por lo tanto, se tiene por establecido definitivamente y desde ya que los demandantes fueron víctimas de detención ilegal, prisión y torturas, entre los años 1973 y 1986, en distintas regiones del país, según cada caso, producto de la acción de agentes del Estado, siendo dichos actos constitutivos de crímenes de lesa humanidad.

**SEGUNDO:** Que, no obstante, se debe consignar que la parte demandante rindió en folio 25 la siguiente prueba documental.

1.- Copia de la carpeta de antecedentes entregada ante la Comisión Valech I, por Juan Segundo Galleguillos Rojas, autorizado por ministro de fe del INDH.

2.- Certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el que se indica que Juan Segundo Galleguillos Rojas, se encuentra calificado como víctima en el listado de Prisioneros Políticos y torturados, conocida como Comisión Valech I, individualizada en el N°9393.



«RIT»

Foja: 1

3.- Certificado N° 129, emitido en el mes de diciembre del año 2021, por el Programa de Salud y Atención Integral en Salud (PRAIS), del Servicio de Salud Arica, Jeannette Valenzuela Navarrete, Psicóloga, y Viviana Abarca González, Trabajadora Social y Coordinadora, quienes examinan e indican las consecuencias psicológicas que sufre Juan Segundo Galleguillos Rojas, producto de los hechos de tortura y detención sufrida..

4.- Copia de la carpeta de antecedentes entregada ante la Comisión Valech I, por Víctor Rubén Morales Inda, todo debidamente autorizado por ministro de fe del INDH.

5.- Certificado N° 131, emitido en el mes de diciembre del año 2021, por el Programa de Salud y Atención Integral en Salud (PRAIS), del Servicio de Salud Arica, Jeannette Valenzuela Navarrete, Psicóloga, y Viviana Abarca González, Trabajadora Social y Coordinadora, quienes examinan e indican las consecuencias psicológicas que sufre Víctor Rubén Morales Inda, productos de los hechos de tortura y detención sufrida.

6.- Copia de la carpeta de antecedentes entregada ante la Comisión Valech I, por Ana María Olivares Tapia, todo debidamente autorizado por ministro de fe del INDH.

7.- Informe Psicológico de Evaluación de Daño Asociado a Violencia Política en Dictadura, emitido el día 15 de abril del año 2022, por Cristián Mauricio Vilches Guerra, psicólogo, quien examina a Ana María Olivares Tapia, por los perjuicios cometidos en su contra.

8.- Copia de la carpeta de antecedentes entregada ante la Comisión Valech I, por Jaime Orlando Rivera Pérez, todo debidamente autorizado por ministro de fe del INDH.

9.- Certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el que se indica que Jaime Orlando Rivera Pérez, se encuentra calificado como víctima en el listado de Prisioneros Políticos y torturados, conocida como Comisión Valech I, individualizada en el N°20579.

10.- Informe Psicológico de Evaluación de Daño Asociado a Violencia Política en Dictadura, emitido por Cristian Mauricio Vilches Guerra, psicólogo, quien examina a Jaime Orlando Rivera Pérez, por los perjuicios cometidos en su contra.

11.- Copia de la carpeta de antecedentes entregada ante la Comisión Valech I, por Pedro Patricio Rojas Uribe, todo debidamente autorizado por ministro de fe del INDH.

12.- Certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el que se indica que Pedro Patricio Rojas Uribe, se encuentra calificado como



«RIT»

Foja: 1

víctima en el listado de Prisioneros Políticos y torturados, conocida como Comisión Valech I, individualizada en el N°21422.

13.- Informe Psicológico de Evaluación de Daño Asociado a Violencia Política en Dictadura, emitido el día 15 de abril del año 2022, por Cristian Mauricio Vilches Guerra, psicólogo, quien examina a Pedro Patricio Rojas Uribe, por de los perjuicios cometidos en su contra.

14.- Copia de la carpeta de antecedentes entregada ante la Comisión Valech I, por Dina Beatriz Antonina Torroja Yáñez, todo debidamente autorizado por ministro de fe del INDH.

15.- Certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en el que se indica que Dina Beatriz Antonina Torroja Yáñez, se encuentra calificado como víctima en el listado de Prisioneros Políticos y torturados, conocida como Comisión Valech I, individualizada en el N°24522.

16.- Informe Psicológico de Evaluación de Daño Asociado a Violencia Política en Dictadura, emitido el día 15 de abril del año 2022, por Cristian Mauricio Vilches Guerra, psicólogo, quien examina a Dina Beatriz Antonina Torroja Yáñez, por los perjuicios cometidos en su contra.

**TERCERO:** Que, además, en el folio 17 consta el oficio ORD. DSGT N° 4792-3590, del Instituto de Previsión Social, de fecha 8 de octubre de 2021, que informa sobre “beneficios de reparación” pagados a Dina Beatriz Antonina Torroja Yáñez, Ana María Olivares Tapia, Jaime Orlando Rivera Pérez, Pedro Patricio Rojas Uribe, Juan Segundo Galleguillos Rojas y Víctor Rubén Morales Inda.

En este oficio se comunica al Tribunal que los demandantes, por ser víctimas de Prisión Política y Tortura (Valech), reciben beneficios de reparación de las Leyes N° 19.234, 19.992, 20.134 y 20.874.

Se especifica que: a) Dina Beatriz Torroja Yáñez ha recibido por concepto de pensión Ley N° 19.992 la suma de \$44.609.778; por concepto de aporte único Ley N° 20.874 la suma de \$1.600.000; por concepto de aguinaldos la suma de \$538.949; siendo el total pagado \$46.768.727; pensión de sobrevivencia Velech \$160.013 y la pensión actual \$212.920; b) Ana María Olivares Tapia ha recibido por concepto de pensión Ley N° 19.992 la suma de \$20.488.373; por concepto de aporte único Ley N° 20.874 la suma de \$1.000.000; por concepto de aguinaldos la suma de \$376.670; siendo el total pagado \$21.865.043 y la pensión actual de \$194.727; c) Jaime Orlando Rivera Pérez ha recibido por concepto de pensión Ley N° 19.992 la suma de \$30.775.210; por concepto de aporte único Ley N° 20.874 la suma de \$1.000.000; por concepto de aguinaldos la suma de \$538.949; siendo el total pagado \$32.314.159 y la pensión actual de \$194.727; d) Pedro Patricio Rojas Uribe ha recibido por concepto de pensión Ley N° 19.992 la suma de \$30.662.393;



«RIT»

Foja: 1

por concepto de aporte único Ley N° 20.874 la suma de \$1.000.000; por concepto de aguinaldos la suma de \$538.949; siendo el total pagado \$32.201.342 y la pensión actual de \$194.727; e) Juan S. Galleguillos Rojas ha recibido por concepto de pensión Ley N° 19.234 la suma de \$38.096.310; por concepto de bono Ley N° 19.992 la suma de \$3.000.000; por concepto de aporte único Ley N° 20.874 la suma de \$1.000.000; por concepto de bono Ley N° 20.134 la suma de \$3.450.000; por concepto de aguinaldos la suma de \$668.799; siendo el total pagado \$46.215.109 y la pensión actual de \$191.663; y, f) Víctor Rubén Morales Inda ha recibido por concepto de pensión Ley N° 19.234 la suma de \$38.096.310; por concepto de bono Ley N° 19.992 la suma de \$3.000.000; por concepto de aporte único Ley N° 20.874 la suma de \$1.000.000; por concepto de aguinaldos la suma de \$668.799; siendo el total pagado \$42.765.109 y la pensión actual de \$191.662.

Se indica también que los demandantes no han recibido otros beneficios de reparación o previsionales en ese instituto.

**CUARTO:** Que, así las cosas, corresponde valorar las probanzas rendidas por las partes, comenzando por los instrumentos. En este sentido, no se registran impugnaciones fundadas en causal legal y acogidas respecto de ninguno de los que fueron puestos en conocimiento de la contraria, ni alegaciones respecto de las virtudes formales de los públicos. En consecuencia, se reconoce a los instrumentos señalados el valor probatorio que la propia Ley les atribuye, según su naturaleza, salvo los privados emitidos por terceros y que no fueron ratificados en el juicio, que solo se tendrán como base de una presunción judicial.

En efecto, la justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio corresponde hacerla en la forma dispuesta por el legislador. Por tanto, respecto de los instrumentos públicos, se advierte que emanan o fueron autorizados por un funcionario público, actuando en tal carácter y en materias de su competencia, contando con las formalidades que señala la ley, sin que la circunstancia de ser una copia les reste valor, precisamente por no haber sido impugnados.

De esta manera, los instrumentos públicos acompañados hacen plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha, gozando de una verdadera presunción de autenticidad.

De cualquier manera y en una perspectiva general, se percibe como un hecho público y notorio que existe en la sociedad un consenso mayoritario acerca de que efectivamente se violaron los Derechos Humanos de muchas personas durante el gobierno autoritario del Pdte. A. Pinochet, conforme dan cuenta las condenas que se han sucedido desde que el país retomó el sendero democrático.



Por lo tanto, coherente con la defensa desplegada por el Fisco, no hay motivo serio y grave para dudar acerca de la verdad de los hechos relatados en estos informes, especialmente los confeccionados por la Comisión Valech, acompañados –en lo pertinente- en copia.

**QUINTO:** Que, en cuanto a las excepciones de reparación integral y pago opuestas por el Fisco, debe decirse que la defensa de los actores no contravino que hayan recibido los beneficios y transferencias que señala el Fisco en su contestación, por ser una consecuencia necesaria del hecho de haber sido incluidos en la nómina del informe realizado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

**SEXTO:** Que, sin perjuicio, no debe olvidarse que los hechos fundantes de la responsabilidad pretendida son delitos de lesa humanidad, esto es, aquellos actos que la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad considera cometidos *“como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”*, incluyendo asesinato, exterminio, prisión arbitraria, violación, tortura, persecución política, desaparición forzada y otros actos inhumanos graves, calificación jurídica que no fue objeto de debate entre las partes, motivo por el cual se debe atender a los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos, integrados a nuestra legislación interna por disposición del artículo 5° de la Constitución Política de la República, que consagra el derecho de las víctimas y otras personas a obtener la reparación de los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, puesto que *“el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”*.

En este sentido, conviene recordar que los artículos 1.1 y 63.1 del Pacto de San José de Costa Rica, publicado el 5 de enero de 1991, establecen lo siguiente:

*“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. “Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera precedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada”.*



Por lo tanto, se constata una clara divergencia entre el contenido de las excepciones señaladas y lo dispuesto por la Convención Americana, debiendo estarse a esta última, atendida la naturaleza del ilícito, por cuanto la responsabilidad del Estado queda sujeta -en estos casos- a las reglas del derecho internacional, que excluyen –en todo aquello que sean contrarias a éste- las del derecho interno.

En consecuencia, atendido además que las leyes invocadas por la defensa fiscal no establecen verdaderas indemnizaciones sino que un conjunto de derechos y/o beneficios para las víctimas y sus familiares, como ocurre con las pensiones de reparación, medidas con las que el Ejecutivo y el Legislativo han intentado progresivamente hacerse cargo de un problema esencialmente humanitario, político y, en definitiva, histórico, no se avizora la existencia de incompatibilidad alguna con las indemnizaciones pretendidas en sede judicial, por ser diferentes, siendo importante consignar que no está prohibido otorgarlas y que así se ha hecho en múltiples sentencias.

**SEPTIMO:** Que, en base a los mismos argumentos, debe agregarse que la imprescriptibilidad de la acción penal trae como consecuencia la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción civil, producto del transcurso del tiempo, desde que el hecho generador de la responsabilidad es al mismo tiempo un delito de lesa humanidad, vale decir, no un ilícito civil cualquiera. De otra manera resultaría que se permite perseguir en todo tiempo y lugar estos crímenes, pero no así la responsabilidad civil, lo que no se entiende si se considera que evidentemente la responsabilidad penal es de mayor entidad que la patrimonial.

Por lo tanto y como este Tribunal ha señalado en pronunciamientos anteriores, aplica aquello de que quien puede lo más, puede lo menos, no pareciendo razonable un sistema que desintegre las responsabilidades que emanan de un mismo hecho, cuando éste tiene la connotación aludida con anterioridad.

**OCTAVO:** Que, así las cosas, descartadas las excepciones opuestas por la demandada, cabe destacar que la Excm. Corte Suprema ha conceptualizado el daño moral como: *“un mal, un perjuicio o una aflicción en lo relativo a las facultades espirituales, vale decir, cuando se ocasiona a una persona un dolor o aflicción en sus sentimientos”* (R.D.J., T. LXVIII, secc. 4ª, pág. 168). Asimismo, ha sentenciado lo siguiente: *“Que el daño moral, como todo daño, debe ser probado por quien sostiene haberlo padecido; al menos cuando es la base de la obligación de repararlo, conforme al artículo 1698 del Código Civil. Sin embargo, en determinadas situaciones, por la naturaleza y características del daño material producido, particularmente cuando se trata de daño corporal, el daño moral es tan*



«RIT»

Foja: 1

*natural y perceptible en la víctima que es del todo razonable presumirlo. Así también ha sido resuelto (por ejemplo, Corte Suprema, rol 735-2015). En estas circunstancias se produce una alteración del peso de la prueba en cuanto, debiendo la víctima probar el daño, es el demandado quien tendría que probar que, debido a ciertos hechos o circunstancias, la víctima no sufrió efectivamente el daño que postula” (Rol N° 12.176-2017).*

Pues bien, el presente caso es justamente uno de aquellos en que “*el daño moral es tan natural y perceptible en la víctima que es del todo razonable presumirlo*”. En efecto, se trata del caso de seis personas que fueron detenidas en su lugar de trabajo o estudio, entre los años 1973 y 1986, algunos más de una vez, por causa de sus pensamientos o actividades políticas, siendo conducidos contra de su voluntad hasta recintos policiales y militares, donde fueron interrogados y torturados física y psicológicamente, por ejemplo, mediante la aplicación de electricidad, la utilización de gases y simulacros de fusilamiento.

Los tratos violentos y degradantes que les fueron infligidos son consecuencia del actuar coercitivo de agentes del Estado, cuyo deber funcionario en ningún caso ni momento validó la adopción de procedimientos y medidas como las operadas en estas personas, aprovechándose de una posición de poder y engendrando en las víctimas una sensación de vulneración, despojo e incertidumbre persistente, que razonablemente no pueden tenerse como inermes o carentes de carga emocional, son un elemento definitivamente esclarecedor de lo que podría retratarse como una auténtica desdicha personal, por lo que al tenor de lo que disponen los artículos 426 del Código de Procedimiento Civil y 1712 del Código Civil, se presume que los demandantes fueron lesionados en su esfera inmaterial y en magnitud importante, atento a los apremios que sufrieron y las consecuencias psicológicas que padecen, reveladoras de la gravedad de los tormentos.

No podría concluirse de otra manera, desde que el Estado de Chile los ha reconocido oficialmente como víctimas de prisión política y tortura, a partir de lo cual y en conjunto con los otros antecedentes adjuntados al proceso, y, especialmente, que estos hechos no fueron cuestionados en el juicio en cuanto a su ocurrencia, solo cabe creer en las versiones entregadas, y en relación al dolor moral invocado, tenerlo por serio y grave, por no poder esperarse otra cosa.

Pues bien, conforme al juzgamiento efectuado por el Tribunal de los hechos narrados y la afectación de los demandantes en su dimensión espiritual, que se aprecia como permanente, se concluye en justicia el otorgamiento de una satisfacción de reemplazo, que en prudencia y equidad, a la luz del mérito de los antecedentes, se determina en la suma única y total de \$25.000.000 para cada





«RIT»

Foja: 1

uno de ellos, que se deberá pagar más reajustes e intereses legales, desde que esta sentencia resulte ejecutoriada.

**NOVENO:** Que no se condenará en costas a la parte demandada, por estimarse que litigó con motivo plausible.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 5° y 6° de la Constitución Política de la República; I. b) de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad; 7.1 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; 1437, 1698, 1699, 1700, 1702, 1706, 2314 y siguientes, 2514 y 2515 del Código Civil; y 144, 170, y 342 del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I. Que se rechazan las excepciones de reparación integral, pago y prescripción alegadas por la parte demandada.

II. Que se acoge la demanda, solo en cuanto se condena a la parte demandada a pagar la suma de \$25.000.000 a cada uno de los demandantes, por concepto de indemnización por daño moral, más reajustes e intereses.

III. Que no se condena en costas.

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Rol C-6193-2021

**DICTADA POR DON MATIAS FRANULIC GOMEZ, JUEZ TITULAR DEL VIGESIMO NOVENO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, trece de Junio de dos mil veintidós**



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.

A contar del 03 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horacoficial.cl>